



Consejo Económico y Social

Distr. general
24 de abril de 2012
Español
Original: inglés

Período de sesiones sustantivo de 2012

Nueva York, 2 a 27 de julio de 2012*

Tema 2 c) del programa provisional

**Serie de sesiones de alto nivel:
examen ministerial anual**

Declaración presentada por la Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor, organización no gubernamental reconocida como entidad consultiva por el Consejo Económico y Social

El Secretario General ha recibido la siguiente declaración, que se distribuye de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 30 y 31 de la resolución 1996/31 del Consejo Económico y Social.

* E/2012/100.



Declaración

Los ingredientes esenciales para erradicar la pobreza figuran en el tema del examen ministerial anual: “Promoción de la capacidad productiva, el empleo y el trabajo decente para erradicar la pobreza en el contexto de un crecimiento económico inclusivo, sostenible y equitativo en todos los niveles a fin de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio”. Los Objetivos se centran en la erradicación de la pobreza y en el empoderamiento del 50% de la población (mujeres y niñas) mediante la promoción de la igualdad entre los géneros a través del acceso a la educación, los servicios de salud, los derechos a la tierra y los mercados financieros, en especial en las zonas rurales. La dificultad estriba en cómo hacer realidad los ideales de las Naciones Unidas y los Objetivos en un mundo de abundancia, movido por el ánimo de lucro y globalizado que se centra en la producción y el consumo y perpetúa las violaciones de los derechos humanos tolerando la desigualdad entre los géneros, la pobreza extrema, el hambre y la malnutrición. Se precisan modelos comerciales alternativos, una redistribución de los recursos y nuevas oportunidades a fin de desarrollar la capacidad de producción, el empleo y el trabajo decente.

Este análisis está respaldado por ejemplos extraídos de la labor de nuestra organización con mujeres y niñas en zonas rurales de todo el mundo. En su reunión sobre productos agroquímicos que se celebró recientemente en Bangalore (India), el Tribunal Permanente de los Pueblos indicó que las empresas de productos agroquímicos se habían enriquecido enormemente y obtenido gran poder, beneficiándose de los productos y tecnologías peligrosos que habían introducido en la agricultura. El Tribunal abogó por la defensa de los derechos humanos, en especial los de las poblaciones vulnerables, instando a los gobiernos nacionales a no ratificar ningún acuerdo comercial o de inversión nuevo que no respetara las normas de derechos humanos. Además, el Tribunal dijo que los gobiernos deberían evitar que se exonerara de responsabilidad penal a las compañías de productos agroquímicos en el derecho nacional y que se acosara e intimidara tanto directa como indirectamente a científicos, agricultores y defensores de los derechos humanos y del medio ambiente. Estas recomendaciones son aplicables a muchas otras instancias del mundo empresarial.

Las mejores prácticas de nuestra organización son prueba de la transformación que se produce cuando las mujeres y las niñas cobran conciencia de su dignidad, ejercen sus derechos humanos y acceden a la justicia de forma individual y colectiva. En 2011, como parte de un programa de desarrollo comunitario en el Paraguay, se crearon 180 jardines agroecológicos basándose en un modelo de asociación, lo que a su vez condujo a la redistribución de recursos comunitarios (como el agua), el desarrollo de destrezas de gestión, una distribución más equitativa de las tareas domésticas, la producción de alimentos saludables, el desarrollo de técnicas de procesamiento de alimentos y las mejoras económicas. Un proyecto sobre la promoción del desarrollo socioeconómico de mujeres marginadas de las castas y tribus registradas en Madhya Pradesh (India) aplica con éxito un enfoque basado en los derechos fundamentales, que demuestra que la implicación local, la participación y la intervención en las decisiones resultan esenciales para erradicar la pobreza. Sin embargo, tales progresos pueden ser anulados por la destrucción y el empobrecimiento cuando no van acompañados por un cambio estructural y sistémico que respalde estos principios.

La Iniciativa sobre un nivel mínimo de protección social que propusieron las Naciones Unidas plantea una política coherente adaptada a las circunstancias nacionales que asegura el acceso a servicios y a un ingreso mínimo a todos los que viven en la pobreza, al tiempo que garantiza un enfoque de derechos humanos. La aplicación de la Iniciativa antes de 2020 facilitará el desarrollo de la capacidad de producción y producirá un crecimiento económico inclusivo, sostenible y equitativo.
